



INFORME DEL IX PLENO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCE

I.- La cumbre del G7 de Biarritz, asumida con desdén por Trump, abordó la catástrofe ambiental por los incendios en la Amazonia, sin consecuencias prácticas más allá de la oferta de una limitada ayuda económica al Brasil, y la iniciativa anunciada por Macron para presentar una propuesta conjunta con los países de la región sobre la Amazonia en la Asamblea General de la ONU. Pese a que la iniciativa procede de gobiernos conservadores, el presidente brasileño, Bolsonaro, la rechazó de plano y llegó a acusar al G7 de agresión a la soberanía de su país, además de atacar a Macron por su "mentalidad colonialista".

Irán, la guerra comercial con China, y el estatus de Rusia estuvieron también entre las discusiones de la cumbre. La maniobra de Macron invitando a Zarif, el ministro de exteriores iraní, a Biarritz, arrancó de Trump el compromiso de aceptar una reunión con el presidente iraní, Hassan Rohaní, sin que ello suponga el inicio de un diálogo real entre Washington y Teherán. Estados Unidos sigue empeñado en destruir el acuerdo 5+1, que ya abandonó unilateralmente, y pretende aumentar las sanciones contra Irán. Objetivo: estrangular económicamente al país, que está en una difícil situación, reducir su influencia en Siria, Líbano y Yemen, y eventualmente forzar la caída del régimen teocrático iraní, en una continuación de la vieja política exterior de Bush y Obama que apostaron por la destrucción de gobiernos y países molestos para Estados Unidos, sin prever las consecuencias posteriores, cuyo ejemplo más extremo es hoy el "Estado fallido" de Libia, en manos de bandas de señores de la guerra y convertida en un mercado de esclavos. Trump continúa la política de anteriores presidentes norteamericanos, agravada por su reconocimiento de Jerusalén como capital israelí, y orientada a asegurar el predominio militar y estratégico de Israel en Oriente Medio, y en preservar su condición de única potencia nuclear de la zona. Hoy, Estados Unidos no tiene la menor intención de volver al acuerdo 5+1, pese a la insistencia de Rusia, China y la Unión Europea para preservarlo.

El encuentro de Zelenski, el presidente de Ucrania, con Trump, en Biarritz, ilustra el interés norteamericano por mantener la herida abierta y el foco de crisis en las fronteras europeas de Rusia. Con la excusa de su apoyo a la "soberanía e integridad de Ucrania", Washington sigue aumentando su influencia en el país, despliega fuerzas en el territorio y en el Mar Negro, y apuesta, de momento, no por su integración en la OTAN sino por acuerdos bilaterales que ligen a Kiev a su dispositivo militar en Europa. Con Georgia, aunque la situación es distinta, su esquema diplomático es similar. El G7 anunció que organizaría un encuentro entre dirigentes ucranianos y rusos sobre la situación en el Donbás, y aunque Trump se manifestó partidario de que, en

el G7, Rusia estuviera "dentro de la tienda de campaña, y no fuera", la cumbre no tomó ninguna decisión al respecto.

La guerra comercial de Estados Unidos y China fue también abordada en el G7, y Trump aceptó seguir insistiendo en la negociación con Pekín, pese a su apuesta por nuevos aranceles y decisiones agresivas, en una coyuntura definida por el propio presidente norteamericano como de "situación desesperada de China", declaración que no sólo indica su falta de conexión con la realidad geoestratégica y su desconocimiento de las relaciones internacionales, sino también la decisión de su gobierno de seguir agravando la relación entre las grandes potencias internacionales, puesta de manifiesto con el abandono del INF y las constantes alusiones a su voluntad de poner fin al START III. Al margen de las potencias presentes en Biarritz, una de las conclusiones evidentes es que un foro de esas características ha perdido peso e influencia internacional, y que la ausencia de Rusia, China y la India convierte en retóricas muchas de las decisiones del G7.

En la preocupante situación internacional, de nuevo ha estallado la cuestión de Jammu y Cachemira, donde la anulación de su estatuto jurídico por el primer ministro indio Modi ha abierto una crisis que puede envenenarse por las constantes operaciones terroristas organizadas por los servicios secretos pakistaníes y el recurso a la represión y la tortura por parte de la policía y el ejército indio. China quiere mantener su relación con Pakistán, sin intervenir en las disputas regionales, para salvaguardar el estratégico puerto pakistaní de Gwadar, importante nodo del proyecto de nueva ruta de la seda. Por su parte, Rusia, quiere preservar su relación histórica con Delhi, al tiempo que Estados Unidos financia a rebeldes de Beluchistán que han atacado en Gwadar lugares donde se alojan los ingenieros chinos.

La crisis de Hong Kong, aunque tiene antecedentes y causas que no guardan relación con la inestabilidad actual y la tensión en el sudeste asiático, se ha convertido en una pieza de cambio y en una herramienta para presionar en el costado sur de China. Las manifestaciones obedecen a un conjunto de motivaciones: desde la insatisfacción y la precariedad económica de algunos sectores de la población, heredada de los tiempos de la colonia británica, pasando por el grave problema de la vivienda en la ciudad, que hace inalcanzable su acceso para muchos ciudadanos, hasta el temor de una parte de la sociedad de Hong Kong ante la nivelación progresiva del nivel de vida con el resto de China debido al fortalecimiento de la economía en el conjunto del país: una parte significativa de la población de Hong Kong se sentía "superior" al resto de China por su mayor bienestar económico, una sensibilidad que tiene rasgos comunes y les hace semejantes a manifestaciones xenófobas de otras partes del mundo, pese a la evidencia de la común pertenencia (de los hongkongneses y de la población continental al mundo chino); sin olvidar la existencia de sectores juveniles que han metabolizado los valores del capitalismo occidental y enarbolan la supuesta "diferencia" de Hong Kong como argumento para romper con China.

Esas manifestaciones particularistas, que no tienen nada que ver con la defensa de la libertad y la democracia, han enarbolado banderas coloniales británicas y enseñas norteamericanas, y tanto la diplomacia estadounidense

como sus servicios secretos están estimulando las protestas para crear una seria crisis a Pekín, en el momento más crudo de la guerra comercial, y para disponer de una carta negociadora de presión, similar a lo que en los últimos años han intentado hacer con el Tíbet y con Xinjiang. El objetivo es evidente: crear problemas a China para dificultar su fortalecimiento.

Las negociaciones de Washington con los talibán afganos han avanzado, hasta el punto de que se anuncia un acuerdo que podría reducir la presencia de tropas norteamericanas en el país, la creación de un nuevo gobierno donde estuvieran presentes ministros cercanos a los talibán. Estados Unidos quiere, al mismo tiempo, reducir sus tropas en Afganistán y mantener acantonados algunos importantes destacamentos para preservar su influencia y para disputar a Rusia y China el predominio en Asia central, sobre todo en Uzbekistán y Turkmenistán. Las negociaciones norteamericanas con los talibán son una mala noticia para Modi: la India apuesta por incrementar la relación con Irán, con proyectos conjuntos, y el reforzamiento de los talibán y, colateralmente, de Pakistán, dificulta esa perspectiva. La desconfianza entre el Pakistán sunní y el Irán chiíta, aunque no es principalmente de carácter religioso, complica la situación en Afganistán.

Otra de las cuestiones relevantes de la situación internacional es el reforzamiento del bloqueo a Venezuela, con medidas orientadas a ahogar al gobierno de Maduro y a la economía venezolana, con la complicidad de gobiernos americanos y europeos, entre los que se encuentra España, cuya embajada en Caracas se ha prestado a amparar los manejos de la oposición con la creación de una "célula de gobierno" en los locales de la cancillería. A las sanciones e incautaciones ilegales de bienes venezolanos decididas por Washington, se añaden las provocaciones y declaraciones agresivas lanzadas por el gobierno colombiano, y la abierta complicidad de la Unión Europea con los ataques a la soberanía de Venezuela. Hay que reforzar la solidaridad con Venezuela, y la izquierda debe asumir su responsabilidad en ello, en un momento en que la revolución bolivariana sufre los mayores ataques de los últimos años.

El otro foco de crisis preocupante en América Latina es Colombia, cuyo gobierno está incumpliendo los acuerdos de paz firmados con la guerrilla, ampara un siniestro plan de exterminio de líderes sociales y de numerosos guerrilleros que se incorporaron a la vida civil, y ha llevado a una parte de las FARC a anunciar su vuelta a la lucha armada, aunque la dirección central del partido creado tras la firma del acuerdo de paz mantiene su apuesta por los acuerdos de paz. El dilema es envenenado: es muy dudoso que el gobierno de Duque respete los acuerdos de paz, que viene ignorando cuando no incumpliendo y tratando de dejar sin efecto. Aún más dudoso es que trabaje con seriedad para acabar con los batallones de la muerte que asesinan a ex guerrilleros de las FARC y dirigentes sociales, por lo que la insatisfacción de una parte de la guerrilla es perfectamente comprensible. Sin embargo, pese a todos los riesgos y a todos los fundados recelos de la izquierda colombiana parece también evidente que la paz es el único camino posible para Colombia y para una región cada vez más tensionada al borde del conflicto armado entre Colombia y Venezuela instigado pro EEUU.

En Oriente Medio, la guerra en Siria no ha terminado, y el apoyo de Israel a los rebeldes sirios durante los últimos años, aunque no ha conseguido sus objetivos, el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad, pero ha debilitado la posición de Damasco en la región, ha creado más problemas para la población palestina de la diáspora, y ha fortalecido el papel dominante de Israel en Oriente Medio. Los recientes ataques israelíes a Siria y Líbano se enmarcan en la estrategia de tensión y guerra de baja intensidad permanente, con acciones punitivas que causan numerosos muertos, y en la liquidación de las últimas esperanzas basadas en los lejanos acuerdos de Oslo. El ataque en Líbano y en Siria, tiene también otro destinatario: Irán, que dispone de batallones militares e influencia en los dos países, y que, además, está enfrentado con Arabia, cuya dictadura mantiene acuerdos con Tel-Aviv. La actuación de Israel sigue suponiendo un gran riesgo para toda la región, y, más allá, para el equilibrio internacional.

II.- La situación en Europa está marcada por el Brexit como exponente máximo del fracaso de la construcción neoliberal de la UE, controladas por un BCE a la medida de Alemania. Las contradicciones entre diversas fracciones del capitalismo ocasionadas por este modelo han provocado que tomen fuerza en diversos Estados un capital de carácter nacional que cada vez rechaza con más fuerza supeditar sus intereses a los mandatos de una UE que cada vez cuenta menos en el concierto internacional.

En este momento, una parte del Capital británico prefiere romper con la UE y relacionarse directamente con los EEUU, recuperando una alianza histórica en el eje Atlántico Norte, lo que provocará en el Reino Unido una reconversión económica y social en clave nacionalista con tendencias xenóforas. Tampoco hay que perder de vista que esta confrontación es aprovechada por Trump en su política de debilitamiento de proyectos de integración regional, sean del modelo que sean, para que no se ponga en cuestión la hegemonía de los EEUU en la construcción de un mundo unipolar.

En este contexto, el Brexit supondrá un serio problema para la economía de toda la UE que mostrará una vez más sus debilidades y contradicciones, y afectará de forma muy concreta a una España muy dependiente de la industria turística en la que el Reino Unido es uno de los mercados más importantes. Al mismo tiempo el Brexit pone de manifiesto como el capital no duda en tomar formas autoritarias, en este caso llegando a congelar o cerrar el Parlamento más antiguo de Europa, para defender sus intereses, nada nuevo en la historia ya que para el capital la democracia solo es válida en la medida que sea un instrumento al servicio de sus intereses.

El problema de la izquierda europea es que ante la falta de un proyecto propio, se sitúa en la disyuntiva de tener que elegir entre aliarse con la derecha nacional de carácter autoritario y xenófobo o defender la continuidad de una UE que mantiene sus déficit democráticos y su carácter neoliberal en lo económico y su supeditación a la OTAN en la política internacional.

De esta manera se pone de manifiesto lo acertado de la posición aprobada en nuestro Congreso. Nuestra postura de oposición a la UE tiene que ir en paralelo a la elaboración de una propuesta de integración europea de carácter solidario, horizontal, socialmente avanzada y defensora de la paz y la cooperación como ejes de su política exterior. Este debe ser uno de los retos que tiene que afrontar tanto el Congreso del PIE, como el Foro que se reunirá en Bruselas.

III.- Tras el final del régimen franquista en España se produjo una pugna entre las fuerzas democráticas y las autoritarias para poner en marcha un nuevo sistema político, pugna finalmente ganada por sectores no rupturistas que desde entonces se han alternado en los sucesivos gobiernos, en su versiones conservadora y reformista, siempre sin cuestionar el sistema y más recientemente, desde la constitucionalización del neoliberalismo a través del Tratado de Maastricht y la reforma del artículo 135 de la CE, admitiendo el capitalismo en su versión financiera neoliberal, -modelo opuesto no ya al socialismo, sino simplemente a un Estado Social- como la única alternativa política posible.

La construcción del Estado social y plenamente democrático ha sido truncado por la consolidación de un entramado institucional y social heredado del franquismo -fuerzas armadas, policía y burocracia del Estado- y un mapa de partidos basado en un bipartidismo imperfecto en el que las fuerzas nacionalistas conservadoras (PNV y CiU) completaban las mayorías parlamentarias. Felipe VI se ha alineado desde el primer día de su reinado con las fuerzas más conservadoras del régimen, tanto en cuestiones políticas como sociales y económicas.

La crisis económica que estalla a partir de 2008 provoca a su vez una crisis de régimen político, contexto que exige a la izquierda un esfuerzo para avanzar en un nuevo pacto político y constitucional que obligue al Estado a garantizar los derechos sociales, económicos, civiles y políticos de los que no han disfrutado las mayorías sociales, la clase trabajadora, como ha puesto de evidente la profunda crisis social padecida en la última década. Síntomas de esa crisis del régimen también es la generalización de prácticas corruptas o la ruptura del pacto constitucional sobre el modelo territorial por la derecha centralista españolista y los partidos nacionalistas catalanes ahora abiertamente independentistas. La negociación colectiva, uno de los pilares económicos del pacto de la transición, ha sido anulada mediante la concesión de un derecho de veto en la práctica a las organizaciones empresariales, tanto por los gobiernos conservadores como por la socialdemocracia liberal que representa el PSOE. La desafección al sistema de sectores cada vez más amplios de trabajadores -incluso trabajadores especializados, técnicos y profesionales, las llamadas capas medias de la sociedad- es palpable, tras comprobar que por primera vez desde 1978 la generación más joven va a vivir peor que la de sus padres. Todo ello obliga a la izquierda transformadora a convertirse en la alternativa política ante la falta de credibilidad de los partidos pilares del régimen, el PSOE y el PP, cada día más cohesionados en la deriva autoritaria y presidencialista de nuestro sistema político.

La realidad es que el componente mayoritario de la izquierda transformadora hoy día en España pretende organizarse en la alianza política electoral de Unidas Podemos, que aspiramos a ampliar en el complejo proceso de construcción del bloque histórico capaz de lograr las transformaciones necesarias que España necesita. Ese proceso requiere una amplia participación sustentada en un proceso de movilización popular que tenga como referencias el 15-M, las marchas de la dignidad, las mareas ciudadanas en defensa de los servicios públicos, las movilizaciones contra el fraude hipotecario, las huelgas generales, las protestas laborales contra la precariedad, etc.

Los poderes económicos tienen su propia estrategia para consolidar los cambios institucionales, sociales y políticos que han implantado mediante las políticas neoliberales que pretenden anular los derechos sociales a través de políticas de liberalización extrema de la economía que implican la privatización de los bienes y servicios públicos, organizando inmensas transferencias de riqueza pública a manos privadas. La construcción de este nuevo modelo requiere de un nuevo mapa de partidos políticos que renueve la imagen de una derecha esencialmente vista como corrupta y saqueadora de lo público y que acabe con cualquier expresión de la izquierda que amenace la estabilidad del régimen. Y a pesar de las deficiencias y limitaciones de Unidas Podemos, hoy día con 42 diputados es percibida por las fuerzas que sustentan el régimen del 78 como la mayor amenaza a su hegemonía, máxime si esta fuerza política insiste en querer formar parte de un Consejo de Ministros en el que no ha habido representación de fuerzas de la izquierda transformadora desde los gobiernos republicanos habidos entre 1936 y 1939.

Las protestas sociales, las luchas populares, la crisis territorial y la consolidación de una alternativa política de izquierdas y rupturista -Unidas Podemos-, han impedido hasta ahora cerrar la crisis de régimen. La presencia en el Congreso de los Diputados de una fuerza alternativa que ha oscilado entre los 70 y los 40 escaños es un escenario de fortaleza de la izquierda a nivel estatal nunca visto desde la muerte del dictador.

IV.- Desde la celebración del último Comité Central en el mes de junio, hemos asistido a un complejo proceso de conversaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para formar el Gobierno de España tras las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

En nuestro análisis de junio partíamos de que para cualquier fuerza política uno de los objetivos importantes de presentarse a las elecciones, y de los votantes de éstas al depositar su voto, es conseguir gobernar. Recordábamos que, durante la campaña electoral de las Elecciones Generales, el candidato de UP Pablo Iglesias construyó su discurso sobre la necesidad de forma parte del Gobierno del España para garantizar políticas al servicio de los trabajadores y del pueblo en general, y aun siendo el PCE consciente de las dificultades de alcanzar este objetivo en un gobierno conjunto con el PSOE, no cabe duda de que el electorado de Unidas Podemos sintonizó con ese discurso. Según el CIS, en junio el apoyo social entre nuestro electorado a la opción de un gobierno de coalición PSOE-UP, llegaba a un 73,2% de los votantes de Unidas Podemos.

A final de agosto (Sigma Dos) más de la mitad de los electores, un 54,9%, prefieren que PSOE y Unidas Podemos lleguen a un acuerdo de gobierno, opción absolutamente mayoritaria entre los votantes de del PSOE (71,7%) y entre los de Unidas Podemos (95%).

Hemos trabajado igualmente por conformar gobiernos progresistas conjuntos entre UP y el PSOE en todos los ayuntamientos y Comunidades Autónomas donde las mayorías de izquierda lo hacían políticamente posible, de forma que por primera vez desde el inicio del Estado Autonómico seis gobiernos regionales son gobiernos de coalición entre lo que podríamos denominar a efectos prácticos el bloque progresista: PSOE-Unidas Podemos en Canarias, Baleares, C Valenciana; PSOE-Podemos con apoyo de IU en Aragón y La Rioja; o alianzas plurales de izquierdas con la participación de IU y Podemos como en Navarra. Además, en el caso de Asturias el PSOE ha contado con el apoyo parlamentario de IU para alcanzar la Presidencia del Principado y formar gobierno en solitario.

Hemos venido trabajando y continuaremos haciéndolo por evitar un adelanto electoral que puede traer una mayoría parlamentaria de las fuerzas políticas de la derecha. A la vez, trabajamos con el objetivo prioritario de mantener la cohesión en el grupo confederal de Unidas Podemos durante el complejo proceso de conversaciones con el PSOE para intentar alcanzar un acuerdo de Gobierno, posición mayoritaria en la Mesa Confederal de Unidas Podemos, proceso del que destacamos los siguientes elementos:

1º.- Mantener abierta la crisis de régimen presupone conseguir evitar que el PSOE alcance un acuerdo con las fuerzas a su derecha, lo que implica volver a articular la mayoría de gobierno que sacó adelante la moción de censura. Ese objetivo podría conseguirse si se alcanza un acuerdo de legislatura con garantías para hacer políticas de izquierdas o si alcanzamos acuerdo de gobierno de coalición también con las mismas garantías, ambos entre Unidas Podemos y el PSOE.

A fecha de hoy resulta evidente que el PSOE nunca ha tenido una intención real de formar un gobierno conjunto con UP en España, adoptando una posición que coincide objetivamente con la de los poderes facticos: patronal, banca, grandes empresas e instituciones que no son elegidas por el voto popular como la Justicia o la Jefatura del Estado. Afirmamos lo anterior a la vista de las posiciones adoptadas en la negociación: oferta de "gobierno de cooperación", negativa a negociar los "ministerios de Estado", negativa a consensuar una posición sobre la cuestión catalana, veto a la presencia del candidato a presidente del Gobierno por UP en un Gobierno de coalición, y la falta de concreción de las competencias de los ministerios finalmente puestos sobre la mesa de conversaciones en julio.

La actuación del PSOE desde el 28 de abril ignora el fin del bipartidismo en España y desprecia la existencia de una mayoría social que apuesta por un gobierno conjunto UP-PSOE-, sin duda por no querer permitir que una fuerza a su izquierda acredite su capacidad de gobierno, es decir, por miedo a que se pierda la percepción de que el PSOE es la única izquierda de gobierno posible.

Pero en Unidas Podemos es mayoritario el criterio, tras el incumplimiento por el PSOE del acuerdo de PGE 2019, de que no se puede esperar que un gobierno del PSOE en solitario cumpla los contenidos de un acuerdo programático de investidura, sino que es necesario garantizar la presencia de UP en el Gobierno para al menos controlar las políticas sociales y laborales, sabiendo que este último escenario también va a ser un escenario de confrontación y contradicción permanente entre las políticas antineoliberales que presiden cualquier acuerdo programático UP-PSOE y la tendencia del PSOE a aplicar medidas económicas neoliberales.

Nuestra posición, acordada por este Comité Central, ha sido que IU no formaría parte de un Gobierno de España con el PSOE, aunque apoyaría la formación de dicho gobierno si se diera el caso (opción refrendada mayoritariamente por las bases de IU en la consulta de julio). El PSOE se ha alineado definitivamente con todos los actores contrarios a esta opción, sin duda vetada desde la Unión Europea. En los próximos meses comprobaremos si existe un pacto entre fuerzas políticas, poderes económicos e instituciones no elegidas directamente por el pueblo, para que Unidas Podemos –o un espacio político equivalente- nunca pueda llegar al Gobierno de España.

2º.- Las dificultades en las conversaciones. La negativa del PSOE a construir una mesa de conversaciones con la suficiente antelación, donde pudiera trabajarse de forma sosegada, también ha influido en la falta de acuerdo en la investidura del mes de julio. Pretender negociar un gobierno de España en 72 horas, con equipos reducidos por cada parte, pone de manifiesto tanto la falta de voluntad del PSOE en alcanzar un acuerdo, como la dificultad para construir un proceso de negociación serio. En este contexto, Izquierda Unida solo ha participado en la elaboración de las propuestas programáticas presentadas al PSOE.

3º.- En nuestras últimas reuniones de Comité Central y Comisión política, el PCE acordó trabajar por un amplio proceso de participación social en torno a las conversaciones UP-PSOE, y en caso de alcanzarse un acuerdo de gobierno, consolidar el acompañamiento social y sindical al trabajo de UP. Manifestamos que dicho acuerdo ha sido cumplido sobradamente con alta implicación de las distintas áreas de trabajo del CC del PCE. Más de 400 organizaciones sociales, sindicales y representantes de conflictos en lucha han participado entre mayo y julio en los distintos encuentros y asambleas convocadas por Unidas Podemos y realizadas en el Congreso de los Diputados, convertido durante más de 60 días en el lugar de encuentro y organización de estos colectivos, ante la evidente ausencia de actividad institucional.

Esta vinculación al proceso de elaboración programática a su vez ha permitido que la inmensa mayoría de estos colectivos hayan exigido al PSOE la conformación un gobierno de coalición, dentro de los márgenes que establecimos en nuestro último Comité Central:

- a) Cualquier acuerdo programático -de gobierno o de legislatura en cualquier institución- debe partir de la experiencia y contenidos del

reciente acuerdo de PGE 2019, analizando muy detenidamente qué contenidos ha cumplido el PSOE, cuáles ha cumplido parcialmente y cuáles ha incumplido.

- b) La decisión de Podemos de apostar por participar en el próximo gobierno y la asunción por la Mesa Confederal de Unidas Podemos de esta posición.
- c) La aprobación de la anterior decisión de la Mesa Confederal de UP por los órganos de IU y la posterior aprobación de los militantes de IU en la consulta realizada en julio.

4º.- El proceso de investidura y la abstención de UP. En nuestro último Comité Central también acordamos que el PCE teníamos que trabajar para incrementar nuestra influencia, de IU y del PCE, en Unidas Podemos y mejorar las relaciones entre sus distintos componentes para ir avanzando en fortalecer el proyecto. Como tarea inmediata, este Comité Central acordó también que nuestros núcleos organizaran -allá donde las circunstancias políticas lo permitan- encuentros conjuntos de la militancia de las distintas organizaciones de base de cada ámbito que se identifican con una izquierda con vocación transformadora más allá del PSOE -IU, Podemos, Anticapis, incluso los sectores que se denomina errejonistas- para tener un debate conjunto de análisis de los resultados electorales y de la situación política derivada del cierre del ciclo. Por parte de la dirección central del PCE hemos venido trabajando en reforzar el trabajo de la Mesa Confederal de UP, única incipiente instancia estable de coordinación de las distintas fuerzas que forman parte de UP (Podemos, Izquierda Unida, En Común Podem, Galicia en Común y Equo). La Mesa Confederal no sustituye a las direcciones políticas de las distintas organizaciones que componen UP, pero es una herramienta importante para garantizar un funcionamiento colectivo entre estas, por lo que debemos trabajar por su estabilización como órgano coordinador de la acción política colectiva de UP. Gracias al trabajo de la Mesa Confederal, conseguimos construir consenso -unanimidad- para que el voto del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la investidura del mes de julio fuera abstención y no voto negativo como se defendía inicialmente por la mayoría del grupo, posición contraria al criterio aprobado por Izquierda Unida de votar abstención, todo ello para no cerrar la puerta a continuar buscando un acuerdo programático de gobierno con el PSOE. Izquierda Unida descartó la posibilidad de votar en contra de la investidura para no cerrar las puertas a continuar buscando el acuerdo y también descartó votar favorablemente a la investidura de Pedro Sánchez porque ello no serviría para evitar repetición electoral y habría supuesto romper la cohesión en el grupo confederal, con difíciles consecuencias estratégicas para el mantenimiento del proyecto de confluencia en Unidas Podemos, máxime considerando la posibilidad real de una inminente repetición electoral. Añadamos que en la última reunión de GP en Julio antes de la segunda votación de investidura los dos representantes de IU en la Mesa Confederal defendieron aceptar la última oferta del PSOE sobre entrada en el gobierno y así evitar repetición electoral, con una vicepresidencia de Asuntos Sociales y varios ministerios sociales aunque sin haberse definido claramente sus competencias por parte del PSOE. Esta propuesta fue rechazada en ese momento por una mayoría de integrantes de la Mesa Confederal.

Posteriormente, el PCE e IU hemos venido trabajando en UP por retomar las conversaciones con el PSOE lo más rápidamente posible en el punto donde se dejaron en julio, para lo cual durante todo el mes de agosto desde UP hemos realizado distintas gestiones políticas que no han dado resultado por la negativa del PSOE a volver a sentarse en ese mes. Recuérdese la propuesta programática enviada a mitad de agosto que fue desestimada por el PSOE apenas dos horas después de ser recibida.

V.- En IU y en el PCE hemos atravesado en estos meses situaciones contradictorias. Por una parte constatamos las dificultades en avanzar en el trabajo conjunto en los distintos territorios entre las organizaciones que forman parte de UP -en la inmensa mayoría de CCAA se trata únicamente de Podemos e IU- pero por otra parte no se aprecian avances en la puesta en marcha de las medidas que hemos ido adoptando en los órganos de dirección para mejorar esta situación y poder ir corrigiendo los innumerables conflictos internos que existen entre ambas formaciones políticas en los territorios. No hemos avanzado en la celebración de asambleas conjuntas de las organizaciones de base, o al menos en encuentros, ni hemos reproducido en estos territorios el proceso de encuentro político y trabajo conjunto de construcción programática de un acuerdo de gobierno con las organizaciones sociales o sindicales. La proliferación de conflictos territoriales en UP nos ha dificultado poner en marcha las medidas acordadas para ir superándolos e ir fortaleciendo la unidad popular no solo con nuestros socios políticos, sino con las organizaciones sociales, sindicales y con las representantes de los conflictos. Tampoco hemos sido capaces de formular claramente alternativas estratégicas al proyecto que hoy, con sus problemas y limitaciones, representa Unidas Podemos.

Estamos ante la coyuntura de decidir si en este momento continuamos apostando por el actual proceso de Unidas Podemos, o si por el contrario optamos por poner en marcha un proyecto diferente, que es lo que ocurriría en caso de decidir romper el grupo parlamentario desmarcándonos de los acuerdos que se adopten en la Mesa Confederal cuando no estemos de acuerdo con ellos. En caso de tomar esta última opción, contraria a la estrategia trazada por la XI Asamblea de IU y el XX Congreso del PCE, deberíamos en consecuencia adoptar otras: bien volver a concurrir electoralmente ante la sociedad y la clase trabajadora en solitario como IU o bien forjar nuevas alianzas con otras fuerzas políticas de la izquierda anti neoliberal y transformadora, si bien en este último caso no se alcanza a apreciar la existencia de otros actores en el campo de la izquierda transformadora, al menos en el ámbito estatal. Nuestra opción claramente es mantenernos en Unidas Podemos, defender su pluralidad y amplitud y a la vez mantener la unidad y el máximo de cohesión posible, mejorando sustancialmente el funcionamiento de esta alianza política, buscando amplios consensos en los procesos de toma de decisiones y fortaleciéndola política y organizativamente tanto en las calles como en las instituciones. Somos conscientes de que nuestra fortaleza reside en respetar las diferencias políticas de cada uno de sus componentes, pero sin permitir que las diferencias de criterio político debiliten el proyecto.

A estas alturas parece claro que, en caso de alcanzarse un acuerdo exclusivamente programático con el PSOE, este difícilmente cumpliría ninguna mediada anti neoliberal como revocar las reformas laborales, intervenir los precios de los arrendamientos o garantizar por ley la subida de las pensiones, ni medidas democratizadoras como puede ser el compromiso activo con las políticas de memoria democrática -verdad, justicia y reparación- o la profunda reforma del Código penal y la ley mordaza. También parece difícil creer que la simple entrada de Podemos u otras fuerzas de UP en el Gobierno de España permitiera fácilmente que el PSOE dejara de ser funcional a las políticas neoliberales que siempre acaba aceptando. En esa coyuntura, sin duda lo más importante para la clase trabajadora española es poder fortalecer el proyecto de unidad popular que hoy representa UP, considerando la previsible llegada de una nueva crisis económica, el endurecimiento de las políticas neoliberales consiguiente y el nuevo intento en consecuencia de limitar las libertades públicas. En ese escenario, una IU aislada del más amplio proyecto posible de unidad popular corre un serio riesgo de caer en la insignificancia y en la marginalidad. Por ello, la apuesta del PCE ha de ser preservar la cohesión de Unidas Podemos por encima de todo y adoptar medidas de forma urgente para fortalecerla y ampliarla, lo que significa incrementar el trabajo conjunto por la base y poner todos los recursos y esfuerzos posibles para acabar con los conflictos territoriales y las disputas entre direcciones, para lo cual es imprescindible un claro compromiso de la dirección estatal de Podemos en este mismo sentido.

En estos meses se ha evidenciado una amplia alianza contra Unidas Podemos, de las instituciones del Estado no elegidas democráticamente, de las empresas del IBEX, de la Patronal, y de la totalidad de partidos políticos de ámbito estatal, cuyo objetivo esencial en estos momentos es acabar con ese proyecto político. Para ello, la oligarquía política y económica no ha cesado ni cesará de buscar diferencias en el proyecto, exagerarlas, airearlas y estimular las contradicciones y enfrentamientos entre las distintas organizaciones que formamos parte del proyecto. Somos conscientes de ello y hemos venido respondiendo a esta estrategia con inteligencia política y apostando por fortalecer el trabajo unitario en el seno de UP.

Tres son los escenarios a los que os enfrentamos en septiembre. Alcanzar un acuerdo exclusivamente programático de apoyo a la investidura del PSOE, o llegarse a un acuerdo de gobierno de coalición que cada día es más difícil. Sabemos que ninguno de los gobiernos que salgan de estos posibles escenarios tiene garantizada la estabilidad. Si no conseguimos apartar al PSOE de las políticas desreguladoras, neoliberales y precarizadoras de derechos, la crisis de gobierno vendrá tarde o temprano seguida de una nueva repetición electoral. El escenario que hemos pretendido alcanzar- disponer de cuatro años de estabilidad parlamentaria para abordar con cierta estabilidad el proceso de reorganización de la izquierda y celebración de la Asamblea Federal de IU- no parece posible hoy día. El tercer escenario posible es que no se alcance un acuerdo con el PSOE o incluso que no se repita en septiembre un nuevo proceso de investidura por no encontrar los apoyos suficientes al PSOE e ir directamente a disolución del parlamento. En cualquiera de ellos, y dado que no IU no es aritméticamente determinante en ninguno de ellos, la dirección del PCE debe trabajar por el fortalecimiento del proceso de unidad

de la izquierda en torno a UP. Siendo conscientes de que en caso de repetición electoral el escenario político actual podría cambiar negativamente si de las urnas surgiera una mayoría de las tres fuerzas de derechas, el PCE debe trabajar por alcanzar un acuerdo positivo para la clase trabajadora y que evitara la disolución del parlamento.

VI.- El PCE aprueba apoyar que la Mesa Confederal de UP se rija por los siguientes criterios de trabajo político para intentar alcanzar un acuerdo programático con el PSOE que posibilite un gobierno de coalición:

1º.- El equipo negociador no es autónomo para dirigir el proceso. La dirección política ha de ser la Mesa Confederal. El Equipo negociador debe informar a diario a la MC y esta es la que debe tomar las decisiones políticas sobre la negociación.

2º.- El Coordinador general de IU debe tener un papel importante y visible en el proceso. Ello es imprescindible para cohesionar a Podemos e IU.

3º.- Para avanzar en la cohesión de UP como proyecto estratégico de unidad a medio y largo plazo, lo más pronto posible -en todo caso antes de que finalmente se sepa si habrá algún acuerdo con el PSOE o si vamos a repetición electoral- debe construirse un acuerdo entre IU y Podemos para:

- a) Poner en marcha un proceso de trabajo conjunto entre las organizaciones de bases de todos los componentes de UP en todos los territorios del Estado, supervisado por ambas organizaciones y en caso de falta de acuerdos a ese nivel, supervisado por la Mesa Confederal de UP.
- b) Con el fin de evitar las habituales tensiones preelectorales y evitar que estas influyan negativamente en una posible campaña electoral, debe alcanzarse el acuerdo político entre IU y Ps sobre que en caso de repetición electoral no habrá una nueva negociación electoral entre IU y Ps, sino que se repetirán estrictamente los acuerdos electorales alcanzados para las elecciones de abril 2019, tanto listas como acuerdos de organización de campaña, financiación etc.

4º.- Es necesario continuar trabajando para que las relaciones entre Podemos e IU dejen atrás los métodos y formas actuales, para establecer un clima de mayor entendimiento y cordialidad. Evidentemente a nivel central, pero también haciendo lo posible desde las direcciones federales para que estos problemas de relaciones se corrijan en todos los territorios.

Respecto al proceso de trabajo conjunto, este debe ponerse en marcha a la mayor brevedad para ir cohesionando a las organizaciones de base de IU y Podemos en torno al proyecto y los objetivos de UP. Debemos empezar donde sea posible, con las siguientes finalidades:

1º.- Debemos avanzar en el proyecto que se aprobó en la XI Asamblea Federal de IU de construir un sujeto político de la izquierda alternativa y transformadora más amplio que la actual IU.

2º.- Ir solucionando los muchos problemas de desencuentro y enfrentamiento que los territorios entre IU y Podemos.

3º.- Trabajar en la construcción de espacios de discusión y elaboración conjunta de la izquierda transformadora que partiendo de las organizaciones de base de las formaciones que componemos Unidas Podemos se plantee ampliar las alianzas sociales y políticas sobre un funcionamiento plural, democrático, participativo, en el que se sientan reconocidos los diferentes perfiles en torno a un programa y una acción común. Para avanzar en este objetivo debemos impulsar la campaña conjunta lanzada por la Mesa Confederada de Unidas Podemos, "defender la Esperanza" y tratar de coordinar desde estos espacios comunes nuestra intervención en las distintas movilizaciones, campañas y conflictos que vienen y que ya estamos coordinando en el espacio de UP, como la Huelga general contra el cambio climático, las movilizaciones feministas de septiembre, las movilizaciones de los pensionistas o las consultas republicanas. Para el PCE incrementar la movilización social y sindical es condición imprescindible para hacer avanzar cualquier proyecto de unidad popular y de la izquierda.

4º.- Explicar detenidamente el actual proceso político de construcción de un acuerdo entre el PSOE y UP.

5.- Ir activando a las organizaciones de UP por si nos encontramos inevitablemente abocados a nuevas elecciones, mas probables cada día a la vista de la negativa del PSOE de volver al punto en el que se encontraban las conversaciones en los días anteriores a la fallida investidura y tras proclamar que no va a aceptar un voto de UP "gratis". Es decir, que el PSOE probablemente optará por el adelanto electoral en el caso de que UP decidiera dar su apoyo para la investidura para a continuación pasar a la oposición. Se trataría de comenzar a la mayor brevedad, si pudiera ser a partir de los primeros días de septiembre, y realizar el máximo de actos/encuentros hasta aproximadamente final de septiembre. A partir de ahí se haría una valoración conjunta sobre lo trabajado para ver como continuaríamos.

Las actividades estarían previamente preparadas por las direcciones del ámbito territorial que se decidiera –bajo la coordinación y dirección de las direcciones estatales-, autonómica prioritariamente. La idea es seleccionar ámbitos territoriales donde las relaciones entre ambas organizaciones sean correctas y conseguir resultados positivos de las primeras experiencias que redunden en impulsar el proceso.

Por su parte el PCE debe adaptar en todos sus territorios sus secretarías y áreas de trabajo a las existentes en el Comité Central, proceso comenzado tras el XX Congreso que aún no ha concluido exitosamente, para así ganar eficacia a la hora de alcanzar los objetivos que nos proponemos.

7 de septiembre de 2019